

JORDI CASASSAS

(Coord.)

Juan Avilés, David Casassas, Ángel Duarte,
Juan Carlos Pereira, Santiago Riera, Ismael Saz

LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
PRESENTE

El mundo desde 1848
hasta nuestros días

Ariel



Jordi Casassas (coord.)

La construcción del presente

El mundo desde 1848 hasta nuestros días

Ariel

DINÁMICA POLÍTICA Y DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

ÁNGEL DUARTE

Introducción

En el París de finales de febrero de 1848 estallaba la revolución, y lo hacía con un estruendo similar a como lo había hecho en 1789. Ahora, sin embargo, los actores eran otros. Buena parte de Europa, así como el conjunto de las sociedades atlánticas, habían implementado, en mayor o menor grado, algunas de las innovaciones propias del liberalismo. El camino que quedaba por delante, en materia de progreso del constitucionalismo, de edificación de la moderna ciudadanía y de conformación del Estado contemporáneo, era, sin embargo, largo y complicado.

A punto de alcanzar el ecuador de la centuria, la indisposición de algunos segmentos de las elites sociales de la nación, con una presencia determinante de la mediana y de la pequeña burguesía de negocios, convergía con el malestar de las masas populares. Si aquéllas estaban disgustadas por la estrechez de los límites representativos que fijaba el sistema electoral, éstas se mostraban descontentas, en particular, con las condiciones de vida y de trabajo que se veían obligadas a soportar. La suma de ambos vectores —contestación a las restricciones participativas e intranquilidad social—, facilitaba la irrupción de las multitudes urbanas en la escena pública.

En esta ocasión, los revoltosos, con una notable representación de estudiantes y de obreros en su seno, al fin y al cabo exponentes de la emergencia de la universidad liberal así como del taller y la factoría industrial, conseguían, haciendo uso como fuerza de choque de algunos batallones de la Guardia Nacional, la abdicación de Luis Felipe de Orleans y el establecimiento de la República, la segunda de las francesas. El aliento de 14 de julio parecía recobrase. Ahora no había, como bien sabían los combatientes emplazados tras las barricadas, Bastilla que abatir; pero sí múltiples barreras de orden político y social que derribar. No fueron, sin embargo, las jornadas parisinas el primer síntoma de que otra oleada revolucionaria recorría el continente y ponía en cuestión las bases del sistema social y de Estados establecido, en el Congreso de Viena de 1815, bajo la inspira-

ción de Klemens de Metternich. Como mínimo cabe anotar un par de antecedentes en la impugnación del rígido conservadurismo general y de la legitimidad política de los derechos de los príncipes soberanos.

Las revueltas rurales y urbanas habían puesto de manifiesto, en los dos años anteriores y en el corazón de Europa, las dificultades asociadas al crecimiento económico y la pervivencia, como modalidad de contestación pública, de los cíclicos motines de subsistencias y contra las fiscalidades usuales en tiempos del Antiguo Régimen. Más próxima en el tiempo, un mes antes de la revolución de París, en el reino de Nápoles se había desencadenado una revuelta de matices cívicos. En la Italia meridional, los insurrectos consiguieron que Fernando II concediese, a regañadientes y con ciertas salvedades, una Constitución de características liberales que limitaba la arbitrariedad de los poderes borbónicos.

En cualquier caso, la transferencia de la centralidad de las turbaciones a la capital francesa confería a éstas otro cariz y, sin duda, mayor calado. París recuperaba, como en 1789 o en 1830, el papel de motor y foco propagador de las transformaciones institucionales en los países de su entorno. El pueblo, actor colectivo al que se otorgaba el protagonismo de las jornadas, y en quien se depositaban las esperanzas de futuro, tenía, es cierto, unos límites poco definidos aunque, en todas partes, una advocación crecientemente generalizada. A él ya se habían referido, en marzo de 1829, los cronistas que daban cuenta de los festejos que acompañaron la toma de posesión del presidente norteamericano Andrew Jackson. Una multitud entusiasta y desordenada, enérgica, presentada como vulgar en sus modos y vestimentas, irrumpe en la Casa Blanca y se mezcla, en abierto contraste y para sorpresa de muchos de ellos, con dignatarios y con diplomáticos procedentes del otro lado del Atlántico. Aquí, en los años treinta, el sacerdote liberal francés Jean-Marie Lamennais, reservará, a ese pueblo, el diseño del futuro en el opúsculo *Palabras de un creyente*. Y, en mayor o menor medida, el pueblo será invocado, con ilusión o con pavor, por los románticos interesados en la reforma social; entre ellos, autores tan diversos como Thomas Carlyle, Victor Hugo o Alphonse de Lamartine. En 1846, Jules Michelet aseguraba con complacencia, en su libro *Le Peuple*, que «el calor viene de abajo». Dos años más tarde ese sujeto colorista y potente dejaba de ser una creación literaria y emergía, a imitación de la coalición jacobina, en los entornos populosos de las capitales europeas. El pueblo resultaba ser, en la práctica, la resultante interclasista de la convergencia en la acción colectiva de artesanos de oficio, estudiantes y trabajadores proletarizados, de segmentos del campesinado, de pequeños comerciantes, médicos y abogados, de librereros y periodistas.

Alimentada por este bigarrado sujeto colectivo, la tensión primaveral de 1848 se prolongaría durante meses. Todavía un año más tarde, el 9 de febrero de 1849, los revolucionarios romanos —demócratas, románticos y nacionalistas— proclamaban la República y, tras expulsar al Papa Pío IX, confiaban el gobierno a un triunvirato, encabezado por Giuseppe Mazzini. Quien había sido el fundador, sucesivamente, de la *Joven Italia* y de la Asociación Nacional Italiana, había abandonado el exilio parisino para dirigir en Milán la resistencia contra los

ejércitos austríacos que querían restablecer el *statu quo* alterado. A renglón seguido, Mazzini se convirtió en el portaestandarte del fugaz gobierno romano. Un régimen que contaba con el apoyo de Giuseppe Garibaldi, el gran patriarca del republicanismo liberal italiano e internacionalista, europeo y americano, y, con él, con la legitimación de la corriente heroica del *Risorgimento* y del despertar del pueblo redentor a la vida pública.

En Roma, la experiencia duraría siete meses y sólo acabó gracias a la intervención de los cuerpos expedicionarios que, procedentes de Francia, Nápoles y Austria, acudieron en auxilio del Pontífice. También de España. Aquí, como en otras partes, la iniciativa gubernamental no pasó sin contestación por parte de las emergentes fuerzas de la izquierda liberal. Tanto en las Cortes como en la prensa, progresistas y demócratas rechazaron el envío de tropas contra la república romana, y lo hicieron por múltiples razones. El argumento decisivo, como aseguraba un diputado progresista, era que la República de Roma «es hoy la [fuente] de la civilización, la del progreso de las sociedades políticas; es la causa de los principios sobre los cuales se asientan todos los Gobiernos de justicia, todos los Gobiernos de libertad». Al fin y al cabo, la revolución había dejado de ser parisina o romana para devenir europea y, a la manera como se entendía por entonces, universal.

La primavera y el verano de 1849 experimentarían el reflujo de un ciclo de agitaciones que afectó, además de a Francia y a los restantes territorios italianos, a Prusia y a los diversos Estados alemanes, así como a los dominios de la corona austriaca de los Habsburgo. Entre estos últimos, y de manera singular, los tumultos incidieron en una Hungría apostada tras el liderazgo patriótico de Lajos Kossuth. Otros entornos menores del continente, ya fuese por la débil intensidad de las revueltas o por su carácter periférico, vivieron también con inquietud unas jornadas que, por su extensión y motivaciones, pasaron a ser conocidas, en aquellos mismos meses y por la posteridad, como «la primavera de los pueblos».

En realidad, una vez pasado el primer momento de euforia democratizadora y nacionalista, la estabilidad política acabó siendo, después de 1848, tan duradera y profunda como la ensayada tres décadas antes, bajo la etiqueta de Restauración. Con la pérdida de fuerza del flujo revolucionario se impondría, aunque con sobresaltos episódicos, como el de la guerra de Crimea de 1854 a 1856 o la Comuna parisina de 1871, la bajamar liberal y burguesa, el equilibrio de las potencias y el afianzamiento de un orden social que, aunque novedoso en sus rasgos esenciales, no dejaba de contar con persistencias del Antiguo Régimen.

En Europa, y en buena parte del mundo, se afianzaría, hasta la primera década del siglo XX, un panorama presidido por el crecimiento económico y la expansión territorial de la moderna sociedad industrial, el funcionamiento de marcos institucionales de cuño liberal y parlamentario, la conformación última de buena parte del moderno Estado-nación, la regulación de los desacuerdos internacionales mediante una compleja actividad diplomática y la emergencia imparable de nuevas modalidades de conflicto social. El socialismo y el obrerismo evolucionaron tanto en el seno de los respectivos marcos nacionales como en su dimensión in-

ternacional. En 1864 se creaba, en Londres, la Asociación Internacional de Trabajadores. Más allá de las estructuras organizativas, se perfilaban con mayor nitidez, en sus rasgos fundamentales, tanto ideologías originales de carácter comunitario como movimientos sociales de base artesanal y obrera. El marxismo, y en ciertas áreas el anarquismo, tomaba el relevo al socialismo romántico. El cooperativismo y el sindicalismo precedían, aunque no anunciaban necesariamente, la eclosión en los años 1880 y 1890 de la socialdemocracia. Con todo, el equilibrio político y social quedaría asegurado, gracias a las reformas liberalizadoras adoptadas en los años sesenta, hasta la gran crisis que se abrió con el inicio de las hostilidades de la Gran Guerra (1914-1919).

Como acabamos de apuntar, la generalización de los marcos liberales de diseño de las políticas generales se produjo en paralelo a la emergencia o consolidación de flamantes Estados nacionales, tanto en América Latina como en Europa. Con perfiles casi exclusivamente republicanos, el conjunto de países confirmados en su independencia tras la batalla de Ayacucho, procurarían resolver, bajo premisas liberal-conservadoras, su destino nacional. El proceso aparecería marcado por las dificultades presupuestarias; por la militarización heredada de las guerras de independencia; por la permanente tensión entre los modelos unitarios y los federales, y aun los de naturaleza confederal; por el quimérico encaje de los pueblos indígenas en los esfuerzos de nacionalización de las elites criollas; así como por el conflicto, en absoluto nimio, entre los proyectos secularizadores de las minorías liberales y la herencia cultural católica. Mientras tanto, en Europa, con una Iglesia católica replegada sobre sí misma, adquirirían singular trascendencia la conformación de las nuevas naciones italiana y alemana. En este último caso dejando atrás el estadio previo de las agrupaciones arancelarias y de las combinaciones cívico-económicas, prohijadas por el economista Friedrich List y concretadas en el vínculo aduanero de los Estados alemanes del Norte conocido como *Zollverein*.

Junto a las unificaciones, el mapa político se transformaba en el decenio de 1860 con la Segunda Acta de Reforma en Gran Bretaña y el establecimiento del dominio en el Canadá (1867), la sustitución del Segundo Imperio por la Tercera República en Francia (1871), el acuerdo constitucional entre Austria y Hungría (1867), la revolución liberal en España (1868), las evoluciones constitucionales en Grecia (1864) y Serbia (1869) e, incluso, con las iniciativas de tímido reformismo social en la Rusia de Alejandro II (1861/1864).

Más allá de los escenarios europeos, la guerra civil norteamericana, con la subsiguiente erosión de lealtades particulares y la emergencia de una fuerte identidad nacional, las interferencias occidentales en China o la apertura de Japón, tras la revolución Meiji, a los valores provenientes de Occidente, apuntarían dinámicas de globalización del modelo del moderno Estado-nación. Las citadas agitaciones constitucionales instaurarían, pues, en buena parte de la Europa occidental, y en otras áreas del planeta, unas normas parlamentarias y constitucionales estables.

Los procesos anotados, el liberal y el nacional, vendrían acompañados por el impulso inusitado de la expansión imperialista. Un florecimiento que contribuiría tanto a la reorganización del espacio central del Viejo Continente —la *Mitteleu-*

ropa articulada por la monarquía dual austro-húngara de 1867— como a la proyección política, económica y cultural de éste en el conjunto del mundo. El contrapunto necesario, para la primera de las realizaciones así como para el peso del imperio zarista, fue la progresiva pérdida de influencia del poder otomano. A la pérdida de Grecia, en 1829, se le sumarían ahora el desgajamiento de Rumania (1856), Montenegro (1862/1863), Bulgaria y Bosnia-Herzegovina (1878). La denominada cuestión de Oriente, cuyos orígenes se remontaban a las agitaciones de 1830, pasaría a ser, desde mediados de siglo, el principal foco de inestabilidad continental. El bagaje de complejidades diplomáticas se completaría con la expansión del colonialismo, y el reparto territorial de continentes enteros, y la definición interna de las fronteras centro y sudamericanas.

Si las revoluciones del 48 tuvieron como telón de fondo los ideales y valores propios de la cosmogonía romántica del individuo y el pueblo, la noción de progreso científico, el materialismo, el positivismo y el darwinismo, científico y social, constituirían los referentes culturales e intelectuales que custodiarían y acreditarían la moralidad de la tarea imperialista: británicos y franceses contarían con el aval que les facilitaba la supuesta superioridad moral de su estadio de civilización y la incuestionable supremacía en materia científico-técnica y militar. Si el uso de la quinina permitió, desde mediados de siglo XIX, acceder a escenarios vetados con anterioridad, la revolución de las armas de retrocarga y de repetición, el desarrollo de la navegación a vapor y el de las cañoneras fluviales, entre otros avances de la tecnología armamentística, aseguró el éxito en los combates contra las formas de poder más variadas, del ancestral imperio chino a los débiles reinos del África subsahariana, y la victoria ante los pueblos autóctonos aunque éstos superasen en número a las tropas coloniales.

La expansión europea arrancaba, como hemos señalado, de la convicción de hallarse en un estadio de civilización superior. En toda Europa, el desarrollo de los marcos universitarios y académicos había acompañado, en los decenios centrales del Ochocientos, a la emergencia de las historias nacionales, al crecimiento del negocio editorial y a la expansión y modernización de la prensa. En el último tramo del siglo XIX buena parte de los Estados nacionales europeos habían adquirido conciencia de que, aun siendo importante la generalización de los derechos políticos y de las libertades cívicas, la empresa de erosionar las lealtades locales y provinciales, y de fomento alternativo de la nacionalización de la ciudadanía tenía un importante instrumento en la escuela y en la articulación del servicio militar obligatorio. El Estado-nación, antes que la parroquia o la patria local y en combinación o alternativamente al viejo principio dinástico, exigía la adhesión de los individuos.

La autonomía de la razón y el declinar del peso de las Iglesias en la dirección espiritual de las comunidades y en la regulación de los rituales sociales, en otras palabras, la creciente secularización de las sociedades occidentales, tuvo como contrapunto necesario la posterior emergencia de filosofías vitalistas que pusieron en evidencia los límites de la Europa burguesa y el empuje de las nuevas generaciones dispuestas a enfrentar, con renovado espíritu crítico, el malestar pro-

pio de un cambio de siglo, el del XIX al XX, presidido por el lento pero irreversible surgir de la sociedad de masas.

Algunas razones para un nuevo período revolucionario

El vasto ciclo revolucionario de 1848, un torbellino de agitaciones que atravesó gran parte del continente europeo durante un año y medio, se nutrió de la acumulación de una compleja serie de razones. La desazón provocada entre las clases populares por el desarrollo del capitalismo había dado ocasión, en los años previos y en la mayor parte de las sociedades occidentales, a agitaciones causadas por las condiciones laborales, y de vida cotidiana, de los obreros industriales, por la pérdida, o redefinición, del cometido de artesanos y trabajadores cualificados a raíz de la mecanización y la implantación de modalidades inéditas de organización del trabajo, y, en fin, por las contrariedades que afectaban a un campesinado sometido a las modificaciones que el liberalismo introducía en los sistemas de propiedad de la tierra.

El malestar frente a la racionalidad social y económica del capitalismo liberal se manifiesta en paralelo, y en ocasiones de forma interrelacionada, con las exigencias de ampliación de los mecanismos de participación en el bosquejo de las políticas oficiales. Las expansivas clases medias, y amplios segmentos del universo plebeyo propio de las modernas sociedades liberales abogan, con mayor o menor énfasis —según las coyunturas, las expectativas y los temores de unos y otros— por la generalización de los derechos ciudadanos. Más allá de la conquista del sufragio, la búsqueda de protagonismo surge del seno de la sociedad civil y, en numerosos escenarios, de Francia a América Latina pasando por los Estados Unidos, de modalidades armadas de presencia ciudadana. Las guardias nacionales o populares encuadran a segmentos particularmente activos de unas clases que, a menudo, se ven privadas, o muestran escaso interés, por las fórmulas comiciales de participación. En general, toda esa gama de requerimientos chocarán con los usos arbitrados por el liberalismo doctrinario en favor de la restricción del sufragio y de la limitación de los marcos de libertades —de asociación, de manifestación, de sufragio, de culto o de prensa.

En ciertos casos, el recelo popular frente a lo existente se veía agravado por los efectos de las crisis cíclicas originadas en los desajustes que sufría el mercado entre la oferta y la demanda. También, como entre 1845 y 1848, por la combinación de epidemias que destruían las cosechas de productos básicos en el consumo popular —los cereales o la patata—, de largos y fríos inviernos que agotaban los recursos acumulados y de pandemias, como la del cólera, que impactaban sobre una población subalimentada. En la Francia de 1847, para no ir más atrás en el tiempo, el encarecimiento del pan había provocado revueltas y diversos asaltos a convoyes de trigo. Las algaradas y la presión parlamentaria llevaron al gobierno Guizot a importar grano extranjero lo que, aun parando el primer golpe, contribuyó inmediatamente a aumentar el déficit presupuestario.

La importancia que a esas alturas del siglo había adquirido el circuito atlántico se ponía de manifiesto por múltiples vías. Ciertamente lo hacía en lo referente a la traslación de plagas y epidemias: el hongo *Phyophthora infestans* que afectó en 1842 a la costa este de los Estados Unidos se encuentra tras las crisis de los tubérculos en Europa y, por lo tanto, de las crisis de subsistencias que preceden a la oleada revolucionaria de 1848. Pero también se plasmaba en el creciente volumen de la emigración hacia América. Esta movilidad transoceánica, puesta de manifiesto singularmente en el caso de Irlanda, aunque extensible a la Europa central y a la mediterránea, permitía aliviar temporalmente la presión social derivada de tal estado de cosas. Por seguir con el caso apuntado, los ocho millones y medio de irlandeses de 1845 se habían convertido en apenas seis a la altura de 1850. La drástica reducción demográfica puede atribuirse, casi mitad por mitad, al efecto de las epidemias y el hambre, por un lado, y a la emigración, por el otro. La geografía de la catástrofe fue, con todo, más amplia y llegó hasta el corazón de la Europa continental afectando, entre otros escenarios, a Flandes, la Silesia prusiana y la Galizia austríaca.

A menudo, la cuestión social se solapaba con las agitaciones políticas. Acaso el ejemplo más acabado de esta modalidad pudiera ubicarse en el Reino Unido. La decepción suscitada por la limitada reforma electoral de 1832, combinada con la persistente crisis económica, dio origen, entre 1837 y 1838 al movimiento político obrero conocido como cartismo. Con el apoyo de sectores radicalizados de las clases medias, las reivindicaciones recogidas en la llamada Carta del Pueblo gravitarían con fuerza, hasta 1848 —instante en el que el impacto de los acontecimientos parisinos revitalizaría las demandas cartistas—, sobre la vida británica, tanto en su dimensión parlamentaria como en el ámbito paralelo de la presión social.

Fue también la falta de flexibilidad en materia de derechos electorales y de acceso a la plena ciudadanía el argumento central que esgrimirían, en primera instancia, los revolucionarios parisinos en febrero de ese último año. Con todo, el combustible que extendería por el continente la llama de la revolución tenía una composición más compleja. La exigencia de derechos y libertades cívicas se aunaba a reivindicaciones nacionales y lingüísticas. La denuncia de los escándalos, prevaricaciones y sobornos derivados de la colusión de intereses entre financieros, jueces y políticos se mezclaba con el deseo de ver abolidas las servidumbres y con las más variadas esperanzas de emancipación social. La agenda no podía ser más variada.

Para los gestores de la Europa de la Restauración, el fantasma de la revolución tendría, en la mayoría de las ocasiones, una explicación complotista: la agitación hundiría sus raíces en la actividad conspirativa de las sociedades secretas. En rigor, las maquinaciones de carbonarios y radicales, de liberales avanzados y de socialistas románticos, tuvieron un eco limitado. La reclamación de gobiernos constitucionales, la aspiración a la independencia y la unificación de los grupos nacionales de raíz étnica o cultural, y la esperanza de liquidación de los derechos señoriales que habían resistido al embate de las primeras energías liberalizadoras,

trascendía los reducidos cenáculos exaltados para encarnarse, desde París a Budapest, y desde Copenhague a Palermo, como exigencias propias de una multiplicidad de protagonistas públicos.

París, capital de la revolución

El inmovilismo del gobierno liberal doctrinario encabezado por el historiador François Guizot había frenado en la Francia orleanista los sucesivos exhortos de reforma electiva y parlamentaria, así como las innovaciones reclamadas en materia laboral y social. El obstáculo puesto a estas peticiones despertó las ansias de reforma y facilitó la plasmación de una amplia coalición de intereses opositores. Una modalidad relativamente novedosa de acción colectiva, los banquetes democráticos, proporcionó a las plurales facciones rebeldes un método con el cual hacer presentes sus demandas. Impulsándolas se encuentra la prensa: *Le National* y *La Réforme*. En las redacciones de estos órganos periodísticos se concentran elementos liberales, en la primera de ellas, y democráticos y vagamente socializantes, en la segunda. Prensa y sociabilidad se funden creando un espacio emergente, alternativo y autónomo en relación al establecido por las reglas de la vida política más oficial.

La prohibición de uno de esos ágapes, el que había de tener lugar en París el 22 de febrero de 1848, fue la chispa que activó el incendio. Las manifestaciones hostiles, lideradas por republicanos y contando con sectores anteriormente movilizados de la clase obrera, recorrieron las calles de la capital. Las barricadas, erigidas en los barrios populares, preludian el asalto al palacio real. A esas alturas, Guizot dimitía con la intención de desactivar la protesta. La promesa de Luis Felipe en el sentido de abrir las puertas a un gobierno más reformista, e incluso la abdicación en la persona de su hijo, llegaban tarde: ni una ni otra medida conseguían restar energías a la sedición. La monarquía orleanista caía y su cabeza visible se embarcaba hacia la Gran Bretaña.

La revolución se dotaba de una primera plasmación institucional, el 24 de febrero, con la proclamación de la Segunda República, caracterizada, a imagen de la de 1792, como «una e indivisible». La república daba sus primeros pasos con un notable grado de incertidumbre. El Gobierno Provisional, gestionado en las redacciones periodísticas propulsoras de los banquetes, sería encabezado, sucesivamente, por el poeta Alphonse de Lamartine, por el general Louis Eugène Cavaignac y por los republicanos moderados Alexandre Ledru-Rollin y Adolphe Crémieux. En ese primer gobierno figuran también representantes del radicalismo social: Louis Blanc, autor del folleto *La organización del trabajo* (1839), y el que podrá ser presentado, no sin cierto aparato, como el primer ministro obrero de la Europa contemporánea: Alexandre Albert. Se atribuía a ambos la representación del socialismo y de las masas populares. Los dos sostenían los ideales de asociación y apoyaban exigencias concretas de cooperativas de productores y una red de talleres sociales que debía financiar el Estado, con carácter inmediato, y a fin

de absorber el creciente paro obrero. La fuerza de trabajo debía, en teoría, encauzarse hacia labores de utilidad pública.

Junto a los talleres, que adoptaron la denominación de nacionales, la presión popular arrancó la reducción de la jornada laboral, de doce a diez horas, la proclamación del derecho al trabajo y la creación de una comisión de Gobierno para los trabajadores que tenía su sede en el palacio de Luxemburgo y que estaba presidida por Blanc. Por lo demás, el Gobierno Provisional implementó un ambicioso programa de reformas legales: procedió a abolir la esclavitud, suprimió la pena de muerte para delitos políticos, garantizó las libertades de prensa y reunión, e implantó el sufragio universal masculino: el censo de votantes pasó de 250.000 a cerca de ocho millones de ciudadanos.

A través de este sistema se llevó a cabo, el 23 y 24 de abril, la elección de la Asamblea Constituyente. En ella, los elementos moderados del Partido del Orden, liberales y burgueses, rápidamente organizados en clubes y comités electorales y activando tanto los mecanismos de clientela y deferencia como las prevenciones de la Francia rural frente al radicalismo parisino, obtuvieron la mayoría de diputados. De los 880 constituyentes que se reunieron el 4 de mayo, la mayor parte eran republicanos moderados y orleanistas. Radicales y socialistas apenas contaban con un centenar de representantes. El voto de izquierdas se concentraba en los medios urbanos y, dentro de éstos, en los distritos de significación más popular. La Comisión ejecutiva resultante integró a François Arago, Louis Garnier-Pagès, Lamartine, Ledru-Rollin y, finalmente y como ministro de la Guerra, al personaje clave en la reconducción del proceso político: el general Cavaignac.

El viraje atemperado se impondría tras los acontecimientos del 15 de mayo. Una multitud de entre cien y doscientas mil personas, convocadas por clubes de la izquierda republicana y sociedades populares se manifiesta ese día en pro de la sublevación polaca. Polonia, repartida tras el Congreso de Viena entre rusos, austriacos y prusianos, se alza por la libertad. Auguste Blanqui, conspirador insigne, se dirigirá a los concentrados en la Asamblea denunciando la miseria popular y clamando por la solidaridad con Polonia. A su vez, Armand Barbès, desde la tribuna, reclamará la formación de un cuerpo expedicionario que acuda en ayuda de los rebeldes. Unos y otros atacan al hasta hacía poco aclamado Lamartine y ponen de relieve un par de datos que conviene retener. Por una parte, la fértil combinación que se registra entre el apoyo radical a las nacionalidades oprimidas de Europa y la crítica social a las consecuencias internas de la urbanización y la industrialización. Por la otra, el choque recurrente del París jacobino y plebeyo con unos dirigentes moderados que reciben el apoyo de la Francia profunda, del país rural que asiste con estupefacción a la radicalidad de las demandas de las multitudes capitalinas. Una tensión, la que opone campo y ciudad, que irradiará, más allá de la Francia revolucionaria, al conjunto de las sociedades liberales.

Reorientar el signo de la revolución llevaría, a la Comisión ejecutiva francesa, a suprimir, en el mes de junio, unos talleres nacionales en los que se habrían enrolado centenares de miles de obreros. La revuelta subsiguiente, entre el 24 y

el 26 de junio, fue derrotada por Cavaignac mediante un baño de sangre que cerraría el paso a las perspectivas socializantes y enmarcaría la elección como presidente del sobrino de Napoleón Bonaparte: Carlos Luis Napoleón Bonaparte. Las elecciones presidenciales de diciembre de 1848 darían a éste una victoria abrumadora frente a las diversas candidaturas del republicanismo moderado y avanzado. Dividida la izquierda, al voto del Partido del Orden y al del campesinado, estimulado tanto por el recuerdo de la gloriosa experiencia imperial napoleónica como por el temor a la radicalidad social, se le sumaría, paradójicamente, una buena parte del voto de los trabajadores urbanos. Al fin y al cabo, el principal oponente del nuevo Bonaparte no era otro que Cavaignac, el responsable de la represión militar de meses antes.

La estabilización de la República duraría cuatro años, el tiempo que el príncipe-presidente respetó las instituciones surgidas de la revolución. La deriva conservadora se visualizaría, ya en ese tránsito, tanto en la desarticulación de algunas legiones de la Guardia Nacional y el cierre y persecución de clubes, periódicos y diputados radicales como en la aprobación de leyes —educativas, electorales y de prensa— que limitaban la operatividad de la izquierda republicana y restablecían el acuerdo del ámbito gubernamental con segmentos importantes de la opinión católica. Finalmente, y tras el golpe de Estado de 2 de diciembre de 1851, encabezado por el propio Bonaparte, quien adoptaría el título de Napoleón III, se daría paso a la Constitución de 1852 y al Segundo Imperio francés. La existencia de éste se prolongaría, con notables modificaciones en las dosis de liberalismo, hasta la derrota ante los ejércitos prusianos en 1870.

Berlín, la nación y el imperio

La revolución francesa de 1848 actuó como revulsivo para la activación de numerosos movimientos liberales y nacionales en los Estados alemanes. A la consabida agenda liberal y social se le sumaba, en este escenario, la problemática nacionalista que, con mayor o menor intensidad venía haciéndose presente en los círculos intelectuales románticos. En los territorios del sur y del oeste, en Baviera, Baden-Baden, Sajonia, Württemberg o Hannover, los ecos parisinos propiciarían la multiplicación de disturbios urbanos, la proclamación de constituciones y, al mismo tiempo, el estallido de revueltas en las que el campesinado procedía al saqueo y destrucción de los edificios en los que se guardaban las cartas feudales, garantes de los viejos privilegios señoriales. En marzo, las barricadas se alzaban, por fin, en Berlín. El salto cualitativo era importante. En términos nacionales alemanes equivalía a lo que para la dinámica europea supuso el traslado de la centralidad revolucionaria desde Nápoles a París. Era toda Alemania la que se sumergía en la vorágine insurreccional. En la capital prusiana, el monarca, Federico Guillermo IV, se verá obligado a prometer la concesión de una constitución así como a aceptar la elección de una asamblea representativa.

A lo largo de marzo de 1848 los gobiernos de los territorios alemanes habían sufrido diversos niveles de colapso. Un par de meses más tarde, en mayo, se reunía en Frankfurt un parlamento surgido del sufragio universal masculino con la aspiración de alcanzar la unidad alemana. Los delegados de los treinta y ocho Estados existentes eran, en su mayoría, profesionales: profesores, jueces y abogados, cuadros de las administraciones gubernamentales, hombres de negocios y miembros del clero protestante y católico. La ausencia de instrumentos reales de poder les llevó a reclamar el auxilio del ejército prusiano cuando, en el exterior de la Asamblea e intentando presionarla, retumban en septiembre los ecos de las revueltas populares. Mientras la calle se agitaba, en el interior de la dieta el debate se polarizaba entre los partidarios de una Gran Alemania que integrase al conjunto de los pueblos de habla germánica —incluyendo a los que se encontraban bajo la tutela de Viena— y los adeptos a una Pequeña Alemania que gravitase sobre Berlín y se proyectase sobre el oeste. La querrela se resolvería a favor de estos últimos.

La labor parlamentaria acabaría chocando, entre otras, con la fuerza de las resistencias dinásticas: entre abril y mayo de 1849 Federico Guillermo IV dejará claro su rechazo a la corona imperial que le es ofrecida por el Parlamento de Frankfurt. Al fin y al cabo, como argumentará en carta a su embajador en Londres, un Hohenzollern no puede ampararse en la legitimidad que nace de las barricadas sino que sólo puede admitir aquella corona que lleve impresa la sanción divina, aquella que empezando por los Otton, y continuando por los Hohenstaufen y los Habsburgo, había sido ungida durante milenios por los aceites consagrados y había respondido a la impronta del Sacro Imperio Romano Germánico.

Al conflicto entre Viena y Berlín se le suma, pues, el que nace de la incapacidad de la casa real prusiana por asumir los principios revolucionarios. Aprovechando el reflujo de la revolución, y sosteniéndose en la oficialidad del Ejército y la simpatía de los terratenientes del este del Elba, el monarca procederá a disolver la Asamblea en junio de 1849; y, a pesar de los levantamientos registrados en Sajonia, Baden y el Palatinado, la Constitución será formalmente abolida en noviembre de ese mismo año. Justo doce meses más tarde, Federico Guillermo IV tendrá que asumir, en Olmütz y ante las autoridades austriacas, la renuncia a los proyectos unitarios siendo recuperada la previa, y muy limitada, Confederación Alemana.

Para uso interno, el reino de Prusia se dotará, en 1850 de una constitución. Una parlamento bicameral con representación por tercios en función de la riqueza y la contribución pagada. Aun renunciando al mantenimiento de las servidumbres de tipo tradicional, el sistema electoral garantizaba la hegemonía política de los terratenientes del este —*Junkers*— y la progresiva incorporación a las elites directivas de los industriales renanos. En cualquier caso, y aunque sólo con la posibilidad de acceder a un tercio de parlamentarios en la Cámara Baja, el sistema no dejaba de garantizar mecanismos de participación a la gran masa de ese actor impreciso denominado pueblo.

El Imperio de los Habsburgo. Las revoluciones italianas y centroeuropeas

A la altura de 1848, el imperio austriaco de los Habsburgo era, junto a Rusia, el Estado más grande y poblado de Europa. En su seno, y enmarcadas por las principales divisiones administrativas (Austria, Hungría, Bohemia), convivían más de una docena de minorías nacionales, étnicas y culturales. No es extraño, pues, que las agitaciones de 1848 tuviesen, en este marco imperial, una decidida vocación nacionalista.

En marzo la revolución liberal detonaba en Viena. El día 13 una manifestación de estudiantes y trabajadores condujo, siguiendo la tipología insurreccional clásica, a la formación de barricadas, al enfrentamiento con los soldados y al asalto del palacio imperial. El canciller Metternich se veía obligado a dimitir y, como otros dirigentes continentales de la Europa restaurada, a partir hacia un último exilio en Londres. Si la promesa de concesiones constitucionales permitía reconducir la situación en la capital, no ocurrió lo mismo en otras partes del Imperio. Éste se vio agitado por convulsiones que ponían en riesgo su misma existencia.

Aunque con matices, en Italia la agenda de las revueltas de 1848 contenía, como en el caso alemán, y junto al liberal y el social, un argumento añadido: el de la unidad de la nación. En septiembre de 1845, desde las páginas de la parisiense *Revue indépendante*, Mazzini había asegurado que los italianos eran un pueblo de veinte millones de individuos que habitaban un mismo espacio, perfectamente definido por unos límites trazados por Dios, que hablaban una misma lengua y participaban de similares costumbres y creencias, que eran conocidos como tales desde tiempos inmemoriales y que, además, habían dado a Europa y a la humanidad momentos estelares de unidad, ya fuese en tiempos republicanos e imperiales, ya fuese bajo la égida de la Roma papal. Y, sin embargo, ese pueblo no tenía, a mediados de siglo XIX, ni una bandera ni un nombre político en el concierto europeo. Desgajada en diecisiete Estados, esa comunidad se veía sometida a la injerencia austriaca o, alternativamente, a los intereses familiares de algunas dinastías principescas. La misión de la revolución democrática consistía, pues, en superar esos obstáculos y restaurar, en nombre del pueblo, la antigua grandeza nacional.

Un año más tarde, en 1846, otro político italiano, Camilo Benso, conde de Cavour, argumentaba en sentido bien distinto. En un libro dedicado a los ferrocarriles en Italia sostenía que la agitación democrática no tenía, debido tanto a los obstáculos exteriores como a la fuerza de las fracturas y rivalidades internas, ninguna posibilidad de llevar a buen puerto la ansiada unidad de la nación italiana. Por el contrario, un par de factores podían contribuir a desbloquear los obstáculos. De entrada, el desarrollo de la red ferroviaria, y por extensión de un sistema de comunicaciones, que provocase un movimiento incesante de personas en todas direcciones. Una movilidad que debería contribuir a destruir las mezquinas pasiones municipales, hijas de la ignorancia y de los prejuicios. Asimismo reclamaba un mayor concurso de los gobiernos nacionales, y muy concretamente aludía al Piamonte como hipotético motor del proceso unitario.

Esta última perspectiva tuvo que esperar, para acabar imponiéndose, a que concluyese el ciclo revolucionario de 1848. A los anotados sucesos de Nápoles les seguirían los desórdenes en diversas ciudades de la península. Junto a Fernando I, el Duque de Toscana y el mismo Pío IX se vieron conminados a otorgar a sus súbditos textos constitucionales. A su vez, la Lombardía y el Véneto, territorios regidos por Austria, se alzaron contra la dominación extranjera. La revolución resultó exitosa en la ciudades de Parma y Módena, provocando la activación de la solidaridad nacionalista: el rey el Piamonte, Carlos Alberto, asumió la jefatura y se enfrentó a las tropas austriacas. Tras algunos éxitos menores, los ejércitos italianos fueron derrotados, a partir de julio, por el mariscal de campo Joseph W. Radetzky en Curtatone, Custozza y Novara. La Guerra Nacional, retomada en marzo de 1849 al calor de los acontecimientos de Roma, concluiría, sin embargo, con una derrota definitiva. Radetzky pasó a ser el gobernador general del reino lombardo-veneto y, tras apoderarse de las ciudades de Brescia y Venecia, se estableció en Verona.

La península italiana no fue el único frente abierto para los Habsburgo dentro de esa primavera de los pueblos. A las registradas en Italia se sumaban las reivindicaciones autonomistas de Bohemia, Croacia y Cracovia. En esta última localidad, principal foco del nacionalismo polaco, la revuelta fue contestada mediante una modélica combinación de dos instrumentos habituales en la resolución de conflictos en la Europa de la segunda mitad del Ochocientos: la fragmentación del posible frente opositor y el castigo implacable sobre las ciudades revoltosas. En Cracovia, la manumisión del campesinado, mayoritariamente ruteno y sometido a la nobleza polaca, con lo que se restaban potenciales sinergias, acompañó al bombardeo de la ciudad. Por su parte, y desde los primeros momentos de la revolución, el liberal checo Francis Palacky encabezó un movimiento que exigía la unión y la autonomía, dentro del Imperio, de Bohemia, Moravia y Silesia, el reconocimiento del checo como idioma escolar y la igualdad de derechos entre checos y alemanes. Algo muy similar, sobre todo en lo referente a las reivindicaciones lingüísticas y al programa autonomista, que lo propuesto por la dieta croata reunida en Zagreb. La invitación del Parlamento reunido en Frankfurt para que los alemanes de Bohemia se uniesen a la empresa unitaria provocó la escisión del movimiento liberal demócrata en esta región y la subsiguiente llamada paneslavista de Palacky. El congreso que con esta última orientación se reuniría en Praga, visto como una amenaza real de descomposición de la estructura imperial, facilitaría argumentos a Francisco José I para proceder a la conquista de la ciudad y a la dispersión de los asistentes.

A su vez, e inflamados por la retórica emancipadora de Kossuth —devino célebre su apasionada defensa de los valores de la libertad en la dieta reunida el 3 de marzo—, los revolucionarios magiares crearon un ministerio liberal y consiguieron que el Parlamento de Pressburgo (Bratislava) exigiese de Viena la libertad de prensa, la convocatoria regular de la dieta y la abolición de los derechos feudales. Al asumir la presidencia del Comité de Defensa, Kossuth llegó a proclamar la deposición de los Habsburgo y la independencia del país. El bloqueo de

las expectativas magiars arrancó de la reacción de la Rusia zarista. Nicolás I no estaba dispuesto a facilitar ni la desestabilización del equilibrio de potencias surgido del Congreso de Viena ni la impugnación del principio dinástico, y por ello dio a Austria, en agosto de 1849, la necesaria ayuda militar. Por lo demás, el gobierno revolucionario de Budapest tuvo que encarar la rebelión de las minorías nacionales que vivían en su territorio: serbios, croatas, eslovacos y rumanos continuaban prefiriendo la dominación vienesa, al fin y al cabo más lejana e indirecta, que el proyecto magiar, de inequívoca raigambre étnica.

En última instancia, la clausura de la coyuntura revolucionaria exigió la desaparición de las figuras clave de la Europa restaurada. A la retirada de Metternich siguió, en otoño de 1848, la abdicación de Fernando en su sobrino Francisco José I, en paralelo a la disolución de la Asamblea Constituyente y el establecimiento de un gobierno fuerte decidido a liquidar las revueltas por todo el territorio del Imperio.

Un punto de inflexión: la guerra de Crimea (1854-1856)

A principios de los años cincuenta y tras haber jugado un papel destacado en la liquidación de la oleada revolucionaria de 1848, el zar Nicolás I creyó hallarse ante la oportunidad de extender su influencia en Oriente Próximo, de hacerlo, en suma, interviniendo con renovada ambición en los asuntos turcos. En rigor, desde finales del siglo XVIII Rusia había aspirado a aprovechar el declinar del Imperio otomano con el objetivo de ampliar su presencia en los Balcanes y asegurarse el control estratégico de los estrechos que regulaban el paso entre el mar Negro y el Mediterráneo. En 1841, tras diversos episodios en los que las potencias occidentales dieron apoyo condicionado al Imperio otomano en sus conflictos en Egipto, se había establecido una convención de los Estrechos que dejaba asentado el principio según el cual el control del Bósforo y de los Dardanelos era una cuestión de alcance internacional que desbordaba las apetencias respectivas de turcos y rusos. Ahora, el zar esperaba contar con el apoyo austriaco para proceder a revisar dichos principios. Creía que era la contrapartida exigible a la ayuda prestada a los Habsburgo para sofocar las revoluciones de 1848 y 1849. Al mismo tiempo, conjeturaba, de manera algo más imprecisa, la benevolencia del gobierno británico de George Hamilton-Gordon. Supuestamente éste podría estar interesado en asociarse a un hipotético reparto de los Balcanes tras el desplome del control previo de los turcos. Ambas presunciones se revelarían falsas.

La intervención rusa se justificó por los conflictos entre católicos y ortodoxos tocantes a la protección de los Santos Lugares, en la Palestina regida por el Imperio otomano. En diciembre de 1852, bajo la presión de Napoleón III, el sultán Abdülmecid I se pronunció a favor de los derechos de los católicos. En su condición de protector de la Iglesia ortodoxa, Nicolás I envió una misión a Constantinopla para negociar un nuevo acuerdo a favor de aquélla y asegurar sus derechos en el seno del Imperio otomano. El rechazo a esta segunda exigencia, que

equivalía de hecho a un protectorado ruso sobre los cristianos ortodoxos, comportó, en julio de 1853, la ocupación de los principados turcos de Moldavia y Valaquia. El compromiso, auspiciado por las potencias europeas occidentales, no fue posible y el 4 de octubre, tras asegurarse el apoyo francés y británico, el Imperio otomano declaraba la guerra a Rusia.

Gran Bretaña mantenía un contencioso abierto con la autocracia zarista. Ésta, a diferencia de Turquía, había fijado unos altos aranceles para frenar la entrada de hilados de algodón ingleses en el mercado interior. Por lo demás, el control del espacio mediterráneo y la ruta de las Indias orientales eran motivos estratégicos de primer orden para el Imperio británico. No muy distintos eran los móviles galos: bajo Napoleón III el Estado francés había continuado proporcionando dinero y consejos al sultán, mantenía un alto volumen de comercio en la región, financiaba misiones cristianas y, por lo demás, los círculos financieros e industriales tenían en mente la construcción de un canal, el de Suez, que uniese el Mediterráneo con el océano Índico. Negocios, influencias y prestigios se religaban para explicar las pretensiones de ambas potencias occidentales en la región y justificar su entrada en guerra en el mes de marzo de 1854. A la decisión final contribuyeron tanto la destrucción previa de la flota turca como la negativa rusa a evacuar Valaquia y Moldavia.

A franceses y británicos se les sumarían, más adelante, Austria y el reino de Cerdeña-Piamonte. En este último caso la posibilidad de plantear la cuestión italiana en las futuras negociaciones de paz constituía el principal estímulo de una postrera beligerancia: su entrada en la Alianza datará de enero de 1855. Por su parte Austria, tras obviar las presiones alemanas a favor de la neutralidad, ocupó Valaquia y Moldavia, evacuadas por los rusos ante la amenaza del nuevo enemigo.

El eficaz bloqueo naval permitió a los Aliados trasladar el conflicto a territorio ruso. El objetivo central fue la fortaleza de Sebastopol, en Crimea. A pesar de las victorias Aliadas en Alma, Balaklava e Inkerman, entre septiembre y noviembre de 1854, el conflicto se estabilizó en una guerra de trincheras que amenazaba con eternizarse. La caída de Sebastopol, el 8 de septiembre de 1855, el apoyo austriaco y la muerte, en plena crisis internacional, del zar Nicolás desbloquearían la situación. Su sucesor, Alejandro II, pidió la paz. Reunidas en París, las legaciones respectivas acordaron, en marzo de 1856, el supuesto mantenimiento de la integridad del Imperio otomano. Rusia cedió la orilla izquierda del delta del Danubio, río que adquirió el estatus de internacional y de cauce abierto a la navegación comercial de todos los países. En paralelo, abandonó sus pretensiones de protección a los cristianos ortodoxos. Moldavia y Valaquia se pronunciarían en 1857, en las asambleas de Iassy y Bucarest, por la unidad en un nuevo Estado: Rumania. Habrán de esperar a 1859 para elegir a un mismo príncipe, Alejandro I, y tres años más para establecer una sola Asamblea nacional y un único Gobierno. Tanto Rumania como Serbia serían reconocidos como principados dotados de autogobierno, sustraídos de manera clara de la influencia otomana y tutelados por las potencias triunfantes en Crimea.

La guerra había alterado, durante un par de años, los circuitos comerciales de exportación de grano que regían en el Mediterráneo. Por lo demás, había puesto de relieve la combinación de modernidad y atavismo que habría de presidir la conducción de las guerras en lo que quedaba de siglo. Por un lado las epidemias, particularmente de cólera, provocaron más bajas que las propias acciones militares; la corrupción y la ineficacia administrativa dificultaban el aprovisionamiento de alimentos, pertrechos y munición, y el mantenimiento de formas tradicionales de combate —la «Carga de la brigada ligera» en Balaklava— en un contexto de aumento de la potencia de fuego garantizaba un número elevado de víctimas inútiles. Pero por el otro, el telégrafo pasa a ser empleado habitualmente y por primera vez eran utilizados anestésicos en la cirugía de guerra.

Desde una perspectiva más estrictamente política, la guerra de Crimea supuso el principio del fin del mito del poderío ruso y el auge del prestigio francés. A su vez, la desintegración práctica de la vieja coalición que operaba bajo la etiqueta de Santa Alianza, permitió a Alemania e Italia liberarse de la influencia austriaca y convertirse, en los años siguientes, en naciones independientes. Finalmente, la crisis de Crimea fue el catalizador de las reformas sociales propugnadas por Alejandro II en Rusia.

El Segundo Imperio francés

Una vez afianzado el Imperio, bajo el liderazgo de Napoleón III, Francia viviría unos años de crecimiento económico y, algo que a menudo se obvia, de renovación institucional. El Estado, en estrecha alianza con el mundo de los negocios, impulsó el desarrollo de los transportes, con especial atención al ferrocarril, contribuyó al aumento de la producción agrícola y estimuló la mecanización de la industria. Banqueros y pequeños y medianos comerciantes avalaron un sistema político que aseguraba el restablecimiento del orden, y el auge de la propiedad y de sus beneficios, tras un ciclo de tres años de inestabilidad. A su vez, las tácticas plebiscitarias, inauguradas tras el golpe de Estado y refrendadas el 22 de noviembre de 1852 con motivo de la adopción del Imperio, certificaban el establecimiento de un vínculo directo entre el pueblo y su emperador. A partir de ese mecanismo, el Imperio podría proceder, en los años venideros, a sustituir antiguas alianzas —las fracciones de la opinión católica alteradas por la aventura italiana del emperador tanto como por las medidas moderadamente laicistas— por nuevas afinidades con segmentos del republicanismo moderado dispuestos a priorizar el avance del liberalismo antes que la disputa por la forma institucional propia del Estado.

La popularidad del emperador, y el control de los resortes de poder local y departamental, le aseguraron el éxito electoral en 1857. El Ejército, que había hecho posible el golpe de fuerza, y la Iglesia, muy favorable al Régimen hasta 1860, garantizaban, en esos momentos, su perdurabilidad. A partir de esta premisa, el emperador no renunciaba a sofisticar los mecanismos de control y de arraigo po-

pular adoptando nuevas medidas liberalizadoras desde 1859. El portavoz de la oposición parlamentaria Adolphe Thiers se permitiría aludir, en 1864, a las «libertades necesarias» e inherentes a la estabilización de la sociedad burguesa: la individual, de prensa, electoral y parlamentaria. La transformación del régimen, su liberalización, se acelera a partir de 1867 con nuevas leyes de prensa o de reunión, y, finalmente, será conducida por un antiguo diputado republicano, Émile Ollivier, en funciones de presidente del Consejo desde enero de 1870. El resultado de esta deriva será contradictorio. Los éxitos electorales de los republicanos —corolario inevitable de la flexibilidad en los comicios— dinamizan a la oposición; mientras, los obreros, adscritos o no a la Internacional, desoyen, en el punto del apoliticismo las prédicas proudhonianas y suman sus votos para hacer llegar a los prohombres de la izquierda republicana y socializante a las cámaras legislativas o a los consejos municipales. A las puertas de su derrota y exilio, Napoleón III había anunciado, en fin, una reforma constitucional que tenía por finalidad el asegurar la independencia de los ministros e instituía el Senado como segunda Cámara Legislativa.

El Imperio, por un lado Estado abierto a la ampliación de los mecanismos de representación, es, al mismo tiempo, un edificio cimentado en la proyección exterior. La fortaleza de la sociedad civil y la unidad cultural en el interior del país, amparan, al tiempo que motivan, la activa política internacional de Napoleón III. Fuente de prestigio y reflejo del potencial interno, esa política se plasmó, en primer lugar, en el continente europeo. Con la participación junto a Inglaterra y frente a Rusia en la guerra de Crimea procuró la proyección de los intereses galos sobre el Mediterráneo oriental y los Balcanes, mientras que sus alianzas con los patriotas italianos estarían orientadas a erosionar el ascendente continental de los Habsburgo. Menos éxito tendría en el contencioso abierto con Prusia a raíz de la sucesión en el trono de España. La derrota de Sedán (1870) pondría punto final a su imperio. Tampoco especial alcance tuvo la proyectada Unión Monetaria Latina. Con ella, y a partir de 1865, el Imperio francés pretendía incorporar a Bélgica, Suiza, Italia, Grecia e incluso España a un área monetaria alternativa a las regidas por el patrón oro británico y el patrón plata prusiano. Por lo demás, Napoleón III activó la presencia francesa en otros continentes al consolidar la ocupación de una Argelia cuya conquista se había iniciado en 1830 y asegurarse el dominio de Senegal y Madagascar, con la conquista de la Cochinchina (1859-1862) y Camboya, y con la fracasada intervención en México (1867).

Aun garantizándole ciertas dosis de renombre internacional, la política exterior de Napoleón III no dejó de tener costes en la estabilidad del sistema. La opinión católica recibió con prevención la alianza con los Saboya y, en particular, y tras la derrota de los austriacos en Sadowa (1866), se mostró hostil a una intervención en Italia que, a pesar de dejar a Roma bajo la tutela papal, sustraía a un pontificado situado a la defensiva el control sobre las Legaciones o sobre los territorios meridionales de las Marcas y Umbría. En la década de los sesenta, las tensiones entre el Imperio y los católicos franceses, apuntadas anteriormente, no hicieron sino aumentar debido a las iniciativas estatales tendentes a favorecer el

control público de la enseñanza en sus niveles primario y secundario como en el creciente uso del derecho de veto, contemplado en los acuerdos concordatarios, en el nombramiento de obispos o en las limitaciones adoptadas para la publicación de encíclicas, como la *Quanta Cura* (1864), que entraban en conflicto con el discurso imperial y liberal. También el cambio de decenio marcó un cierto distanciamiento respecto a los sectores industriales. Las políticas librecambistas, y la sensible ampliación de los derechos otorgados al movimiento obrero y al radicalismo democrático —asociación, huelga, prensa, interpelación— abrían el régimen a la izquierda, sin llegar a satisfacerla plenamente, pero a cambio de un creciente malestar entre los elementos del Partido del Orden.

La unificación italiana

El fracaso de las insurrecciones liberales de 1848 y 1849 en la suma de Estados y principados que convivían en la península itálica promovió transformaciones significativas en el nacionalismo italiano. El lema del *Risorgimento*, «Italia farà da se», se mostraba más que limitado en su capacidad operativa. Por otro lado, el tímido proyecto neogüelfo de articulación estatal a partir de los Estados Pontificios había quedado tocado de muerte a raíz de los episodios romanos y la ayuda exterior de las monarquías católicas al papado. Finalmente, en la mayor parte de los territorios se había restablecido la dependencia o, como mínimo, la influencia diplomática de Austria. En estas circunstancias adquiriría relieve la autonomía y la capacidad de diseñar políticas autónomas de un reino, el de Piemonte-Cerdeña, en el que Carlos Alberto, derrotado por Austria en Custoza y Novara, abdicó en su hijo Víctor Manuel II.

Bajo el reinado de éste, y contando desde 1852 con la dirección del conde de Cavour, el reino aspiró a convertirse en un modelo de progreso económico, eficiencia administrativa y gobierno parlamentario. Las iniciativas tendentes a la liberalización del comercio, el fomento de la agricultura, el desarrollo de los ferrocarriles y la mejora de los puertos estuvieron acompañadas por medidas de corte anticlerical, y por un distanciamiento de la perspectiva republicana y conspirativa de acceso a la unidad nacional. Al mismo tiempo, las alianzas internacionales, con la participación subrepticia en la guerra de Crimea y el contacto con Napoleón III tenían como finalidad debilitar el dominio austriaco y abrir el ámbito italiano a la influencia de otras potencias europeas.

El atentado que el emperador francés sufrió a manos del revolucionario Felice Orsini aceleró los contactos de aquél con Cavour. De hecho, el trasfondo del intento de magnicidio facilitó la reunión en la estación termal de Plombières el 21 de julio de 1858, y permitió a Cavour, en abril de 1859, forzar la declaración de guerra contra Austria. El Imperio habsbúrgico cometerá el error de exigir a las autoridades piemontesas el desarme en un plazo de tres días. El gobierno francés hará saber que si Cerdeña es atacada contará con su apoyo inmediato. El 4 de junio, la batalla de Magenta, ganada por las tropas franco-sardas dirigidas por el

mariscal de Mac-Mahon, permite a Napoleón III y a Víctor Manuel entrar triunfalmente en Milán. Veinte días más tarde los ejércitos austríacos, bajo el mando del emperador Francisco José, retroceden en Solferino.

El empuje franco-sardo amenaza el balance de equilibrios entre los Estados europeos y motiva la respuesta de Berlín. Prusia, alarmada por el signo de los acontecimientos, movilizó a sus ejércitos en el Rin, al mismo tiempo que en diversas partes de Italia se producían agitaciones que impugnaban a los poderes establecidos y reclamaban la anexión a la corona de los Saboya y mientras en Francia la opinión católica se oponía a los planes del bonapartismo en la península italiana. La conjunción de estos factores llevó al emperador a firmar por separado la paz con Austria en julio de ese mismo año. El acuerdo franco-austríaco permitió la incorporación de la Lombardía a Cerdeña, aunque aseguraba a Viena retener el control de Venecia.

En cualquier caso, la oleada de agitaciones internas no pasó en vano. La Toscana, Módena, Parma y Romaña se juntaron bajo el liderazgo de Cavour, y los Saboya, tras sendos plebiscitos o elecciones generales. El proyecto no se detuvo a pesar de la excomunión decretada por la Santa Sede, al ser la última de las regiones enumeradas una de las posesiones de los Estados Vaticanos. En 1860 representantes de todos estos territorios se reunieron, por primera vez, en el Parlamento de Turín. Gran Bretaña y Francia procedieron al reconocimiento inmediato del nuevo Estado. En el caso francés, la contrapartida consistió en la cesión de Niza y Saboya a la soberanía del Imperio napoleónico. Los límites y las fronteras se perfilan al tiempo que se generalizan las formas de Estado-nación.

En definitiva, a la altura de 1860, y en sintonía con los planes formulados un par de décadas antes por Cavour, existían un reino italiano en el norte, los Estados Pontificios y el reino de las Dos Sicilias abarcando las regiones meridionales de la península. Este último Estado se encontraba afectado por una agitación soterrada y endémica que sería aprovechada por quien, desde 1848, había mantenido viva la condición revolucionaria: Garibaldi. Al frente de algo más de un millar de seguidores, acicalados con camisetas rojas, el líder nacionalista desembarcó en Sicilia para pasar después a tierra firme, conquistar Nápoles y colapsar la monarquía borbónica. Desde allí se propuso avanzar hacia el norte, hacia Roma, con la finalidad de clausurar el largo empeño de la unidad nacional. Cavour, hasta entonces expectante, pasó a la acción enviando el ejército piemontés y preservando Roma bajo autoridad papal. Una serie de plebiscitos refrendaron la creación, en 1861, del Reino de Italia, bajo la corona de Víctor Manuel II.

El radicalismo democrático, popular y republicano, cedía el paso, en la dirección del proceso unificador, al liberalismo monárquico. El socialismo, el sindicalismo y el anarquismo tomarían el relevo en la canalización de los múltiples descontentos populares, y los territorios irredentos incorporados antes de concluir el siglo lo serían por razón de los avatares diplomáticos continentales. Venecia se incorporaría cinco años más tarde, gracias al apoyo de Italia a Prusia en su enfrentamiento con Austria. Y Roma, la capital eterna de los italianos a la que se había invocado desde la república de 1849, sería incorporada en

1870 tras la retirada de las tropas francesas a raíz de su derrota en la guerra francoprusiana.

El largo proceso iniciado con el *Risorgimento* había combinado la dirección saboyana con la agitación irredentista garibaldiana, la dimensión internacional, europea, del contencioso provocado por la emergencia de un nuevo Estado nacional con el formato estrictamente interno de superación de las ancestrales líneas de ruptura que fragmentaban el cuerpo de la nación italiana. El resultado era un Estado liberal con un cuerpo electoral restringido —600.000 individuos componían el cuerpo electoral para una población de veinte millones de habitantes— en conflicto con la Iglesia —el pontífice se recluyó en el Vaticano al tiempo que renovaba sus condenas al liberalismo— y una nación en la que permanecían las diferencias regionales, entre el norte y el sur, tanto en relación al desarrollo económico como a la operatividad de las instituciones liberales y la misma presencia del Estado.

Alemania, de la revolución a la unificación

La década de 1850 estuvo presidida, en el conjunto de los territorios alemanes, por una dualidad sólo aparentemente contradictoria. En términos políticos, el ciclo revolucionario de 1848 se había cerrado con la derrota del liberalismo y de las expectativas de unificación protagonizadas desde abajo. Los diversos soberanos, en sintonía con la aristocracia y significativos segmentos de las clases empresariales, suprimieron o acotaron, los marcos de libertades de asociación, prensa, reunión y manifestación que, de manera general, habían proliferado a principios de 1848. Las sociedades obreras y los círculos radicales se vieron compelidos a cerrar sus puertas, o a reorientar sus iniciativas hacia un menor radicalismo; mientras tanto el liberalismo perdía fuerza en beneficio de una combinación de expansión de la burocracia, pérdida de autonomía de los municipios y restauración de privilegios nobiliarios y aristocráticos.

Paralelamente, el conjunto de la sociedad alemana, con matices regionales de cierta intensidad, entraba decididamente en el nuevo orden industrial. Las transformaciones registradas en el sistema de comunicaciones y en la articulación del mercado interior facilitaban nuevos argumentos a las potentes tendencias unificadoras. En 1853 se prorroga la unión aduanera por un plazo de doce años. Austria quedaba al margen. Por lo demás, en febrero de 1860, el ministro de Guerra, Albert von Roon, presenta al *Landtag* prusiano sus propuestas de reforma militar. La pieza clave de la hegemonía prusiana en Europa, a lo largo del último tercio del siglo XIX, se ponía en marcha.

El gran protagonista del proceso de unificación alemana, en su último tramo, fue Otto von Bismarck. Tras haber sido diputado en el Parlamento prusiano y contando con el acervo de conocimientos de política europea que adquirió en sus etapas de embajador en San Petesburgo y París, Bismarck se convierte en 1862 en ministro-presidente de Prusia. Es el mismo año en el que los liberales organi-

zados en un nuevo Partido Progresista ganan la mayoría de escaños en la Cámara Baja. Las barreras censatarias estaban dejando de ser un obstáculo para segmentos de las clases medias beneficiarias del crecimiento económico. Por su parte, Bismarck ya no abandonaría el poder hasta 1890. En el primer decenio de su prolongada vida política se dedicó, fundamentalmente, a hacer realidad la unidad de los Estados alemanes bajo la égida de Guillermo I, coronado en enero de 1861. El proyecto pasaba por encima de las reticencias más o menos acentuadas que pudieran manifestar las autoridades de Hannover o de Baviera. Asimismo, obviaba los proyectos alternativos que pudieran otorgar un mayor protagonismo a los Habsburgo. En octubre de 1862 la Dieta había rechazado la iniciativa sajona tendiente a reformar la Confederación en ese sentido.

Para su realización no dudó en llevar a cabo tres campañas militares, aunque ciertamente de envergadura limitada. Casi podrían plantearse como operaciones quirúrgicas encaminadas a soldar o liquidar obstáculos puntuales. La primera, contra Dinamarca, en 1864, y en alianza con Austria, tendría por finalidad asegurarse el control de los condados en disputa con este reino. La invasión austro-prusiana de Schleswig y Holstein acabó con la derrota danesa y, más tarde, en agosto de 1865, en el Convenio de Gastein, se procedió a atribuir Holstein a Austria mientras Berlín pasaba a regentar Schleswig. La segunda de las guerras, contra Austria-Hungría, en 1866, tuvo lugar tras haber neutralizado posibles alianzas continentales de los Habsburgo y haber procedido a la invasión de Hannover, Sajonia y Hesse-Cassel. La finalidad de este conflicto era la de fijar en torno a Berlín, y no en Viena, el polo de control de los territorios meridionales de la nación alemana. La victoria de Sadowa testificó el éxito de la empresa. Los posteriores intentos austríacos de preservar su influencia en la región mediante la conciliación francesa no alcanzaron ningún resultado provechoso. El 23 de agosto de 1866, en el Tratado de Praga, se disolvía la Confederación Alemana que había tenido sus orígenes en 1815. Berlín procedía a la anexión de Schleswig-Holstein, Hannover, Hesse-Cassel, Nassau y la ciudad libre de Francfort. Mientras Austria quedaba al margen, Prusia añadía, de este modo, cinco millones nuevos de alemanes a su administración.

La nueva y ampliada Prusia pasa a formar parte, por último, de la Confederación Alemana del Norte. Sajonia, los ducados de Oldenburg, Meckleburg, Brunswiik, parte de Hesse-Darmstadt, los Estados turingios y las ciudades de Bremen y Lübeck, acabarán formando una liga asociada a la corona prusiana. Ésta se hace cargo de las relaciones, la diplomacia y el Ejército. La unión aduanera, así como la de los servicios postales y telegráficos, vendrá acompañada por la implantación del servicio militar obligatorio. En el Consejo de la Confederación, o *Bundesrat*, Prusia suma 17 votos frente a los 26 que corresponden a los restantes 21 miembros. La Dieta, o Reichstag, será elegida por sufragio universal masculino y, preservando las legislaciones estatales, pasará a elaborar sus propias leyes. Bismarck, a su vez, es designado canciller de la Confederación.

La tercera de las guerras, en 1870, contra la Francia bonapartista, tendrá lugar aduciendo, entre otros, el contencioso sucesorio a la corona de España. La

victoria permitió al canciller tedesco conquistar las regiones germanófonas de Alsacia y Lorena así como cortar los nexos de Francia con los Estados alemanes del sur. Habiendo vencido en los tres conflictos, y proclamado el Imperio en la persona de Guillermo I, bajo una fórmula, la del II Reich, que evocaba la continuidad con el Sacro Imperio Germánico medieval, la dirección bismarckiana pasó a fundamentarse en el mantenimiento de la paz continental y en la competencia, desde posiciones precarias, con el Imperio británico por la expansión ultramarina. En el interior, la lealtad a los poderes de la nueva Alemania llevaría al canciller tanto a procurar asumir algunas de las nuevas realidades sociales de carácter obrero, como a estandarizar los marcos legales o financieros, como, en fin, a entrar en conflicto con la Iglesia católica por el control de las lealtades ciudadanas.

La estabilidad victoriana, liberalismo e Imperio

La insularidad británica, dato que a menudo se presentaba como sinónimo de singularidad, constituye en las décadas centrales del Ochocientos un rasgo definitorio de su evolución política. La estabilidad de los poderes y de las reglas de referencia, así como la capacidad evolutiva de unos y otras, contrastan abiertamente con el ritmo de los acontecimientos que tienen lugar en la Europa continental. La historia avalaría, según los testimonios de la época y aun para no pocos observadores posteriores, dicha originalidad. La peripecia que se extiende desde la Carta Magna de 1215 hasta las revoluciones del siglo XVII, se suponía que había creado un sustrato de afirmación, revolucionaria en su tiempo, de la necesidad de un gobierno por consentimiento y de la igualdad de derechos sociales y políticos. El derecho a la propiedad individual, o el de relacionarse con la administración de Justicia desde un marco de garantías, así como el parlamentarismo, rasgos característicos de la cultura occidental en la era del liberalismo, habrían sido anunciados doscientos años antes en la Gran Bretaña y, en particular, en Inglaterra.

Aunque en el período napoleónico la monarquía británica hubiese sido un actor destacado en la conflictiva definición de Europa, los años centrales de la centuria, presididos por la figura emblemática de la longeva reina Victoria (1837-1901) y asentados sobre la tradición señalada, verían a una Gran Bretaña que implementa un juego de alianzas en los escenarios europeos, trazados siempre desde la conciencia de la no continentalidad, y proyectados en razón de la tarea imperial asumida: la expansión por el mundo, la difusión de su lenguaje, de sus mercancías, de su administración, de sus costumbres y de sus gentes, y los beneficios que de todo ello se derivaban.

En el interior, las reformas de 1832 habían ampliado el derecho de sufragio hasta una octava parte de la población masculina adulta. Hábitos transaccionales seculares y reformas electorales recientes son aducidos para explicar el limitado eco del 48. De hecho, el período que abarca desde el primer gobierno de lord J. Russell, de 1846 a febrero de 1852, hasta la reforma electoral de 1867 marca el

apogeo de la denominada primera época victoriana. Durante esos años los habitantes del Reino Unido viven en un sistema liberal suficientemente flexible como para facilitar la participación electoral de un número creciente de personas. La representación de intereses es canalizada por unos partidos de notables consolidados. La primacía corresponde a los liberales, o *whigs*, que vencen en todas las elecciones y gobiernan durante la mayor parte del periodo bajo la dirección del vizconde de Palmerston. Los conservadores, debilitados por la escisión previa de los seguidores de Robert Peel, sólo acceden al poder en dos breves periodos, bajo la dirección del conde Derby. Es una época, por otra parte, de manifiesta inestabilidad ministerial ya que, en los dieciséis años que van desde la caída del gobierno Russell, en 1852, hasta la formación del primer gobierno de Benjamín Disraeli, en el mismo mes de febrero del año 1868, se suceden hasta siete gobiernos, aunque las dos administraciones más duraderas sean las de Palmerston (1855-1858 y 1859-1865), quien se convierte, por ello, en la figura central del periodo, hasta su muerte en 1865. Sería entonces cuando Gladstone, conocido por sus iniciativas presupuestarias y sus proyectos de reforma electoral se convertiría en el líder indiscutible del Partido Liberal.

Aunque con matices, un amplio consenso de base se forjó entre las elites británicas a propósito del carácter adecuado de la empresa imperialista. De hecho, y en base a este consenso patricio previo, fue posible extender a los ámbitos plebeyos, en su doble condición de productores y consumidores, un notable asentimiento patriótico alrededor de las expectativas de expansión exterior. Los gobiernos liberales de mediados de la década de los cincuenta realizaron una activa política de intervención en Extremo Oriente. La denominada Segunda Guerra China detonó en octubre de 1856 a raíz de un incidente en el puerto de Cantón entre las autoridades locales y la tripulación del mercante inglés *Arrow*. En apoyo de ésta, el cónsul británico planteó exigencias que no fueron atendidas. Las autoridades británicas respaldaron a su representante y una flota inglesa procedería al bombardeo de la ciudad. Las operaciones se prolongaron, con apoyo francés, durante cuatro años, y terminaron con el Tratado de Pekín, por el que los barcos ingleses fueron autorizados a comerciar en el río Yang Tsé, se abrieron once nuevos puertos chinos al comercio exterior y se legalizaba la importación de un producto básico en la conexión imperial británica en el subcontinente asiático: el opio.

Los acontecimientos registrados en las costas del Mar de China, así como la decisión de enfrentar la agitación en la India, no eran en absoluto ajenos a la evolución de las mayorías parlamentarias en el interior de la política británica. El suceso apuntado en el párrafo anterior sirvió, de hecho, para fortalecer al Gobierno, ya que las críticas en la Cámara de los Comunes forzaron la disolución del Parlamento y en unas nuevas elecciones generales, en abril de 1857, los liberales aumentaron su representación parlamentaria. Con 367 escaños, frente a 260 de los conservadores, y 27 seguidores del difunto Peel, Palmerston rubricaba su hegemonía. En otras ocasiones, la centralidad de la política exterior tendría efectos contrarios. Así, la crisis subsiguiente de 1858 vino desencadenada por el fracaso de Palmerston al intentar que los Comunes aprobasen una legislación sobre la

conspiración contra gobiernos extranjeros. En este caso, la competencia con la Francia imperial constituía el trasfondo explicativo. El Gobierno que le substituyó, encabezado por el conde de Derby, contaba con Disraeli al frente de las Finanzas, pero era un gabinete que tenía escaso apoyo parlamentario y las medidas reformistas que adoptó —tanto la admisión de los judíos en el Parlamento como la abolición de la calificación de propiedad para ser parlamentario— no le granjearon precisamente el apoyo de los electores. Los comicios de mayo de 1859 dieron un apretado triunfo a los liberales —325 contra 306 conservadores—, y de nuevo fueron los denominados peelitas quienes permitirían a Palmerston formar un segundo gobierno en el mes de junio. Ahora, el líder liberal decidió incorporar al gabinete a las diversas corrientes liberales, incluyendo a radicales y nacionalistas irlandeses. Incluso hubo una oferta al librecambista Cobden, que no fue aceptada por éste. La falta de un líder sólido en el Partido Conservador permitió a Palmerston decidir medidas de reforma en las que, más que a la fuerza de la oposición, tuvo que estar atento a mantener la cohesión de su mayoría parlamentaria. Ése fue el caso tanto de las iniciativas tendentes a reducir la presión fiscal, impulsadas por Gladstone, como, a lo largo de 1860, la pugna con la Cámara de los Lores para que éstos aceptasen, en beneficio de la representación de los Comunes, una reducción de su papel en la definición de la política presupuestaria. Las iniciativas internacionales de aquel Gobierno mantuvieron la línea de nacionalismo agresivo iniciada por Palmerston.

El fin de la legislatura llevó a unas nuevas elecciones, en julio de 1865, que ratificaron la primacía liberal. Sus diputados sumaron 370 escaños, frente a 288 de los conservadores. Palmerston, sin embargo, no pudo sacar partido de la nueva situación ya que falleció en el siguiente mes de octubre. Aunque Gladstone era la estrella ascendente en las filas del liberalismo, la responsabilidad del nuevo Gobierno volvería a recaer en el veterano conde Russell, que formaría el segundo de sus gabinetes (de octubre de 1865 a junio de 1866), manteniendo a Gladstone al frente de las finanzas.

Paradójicamente, no sería un gobierno conservador, el que tenía por *premier* a Disraeli, quien en 1867 procedería a una nueva reforma electoral. Reforma que, en 1872 se complementaría con el voto secreto, y que en 1884, bajo un gobierno liberal, daría lugar a una nueva ampliación del cuerpo de electores. La reforma de Disraeli significó que se pasase, en el conjunto del Reino Unido, de poco más de 1.000.000 de electores a más de 2.300.000. Esta cifra se acercaba al 40 por 100 de la población adulta masculina. El crecimiento fue lógica consecuencia de la rebaja de la franquicia que daba derecho a voto, tanto en los condados como en los municipios. Además, se disponía la redistribución de 53 escaños, de los que 25 eran asignados a los condados ingleses y siete a Escocia. Se creaban 11 nuevos distritos urbanos y se concedía un representante a la Universidad de Londres. Con todo, y al margen de la población femenina, quedaba fuera del juego electoral un número importante de trabajadores agrícolas, de criados y de hijos adultos que continuaban viviendo en el seno la casa paterna.

La reforma, a pesar de sus limitaciones, alimentó la participación y la inten-

sidad de las disputas electorales. Esto, como es natural, fortaleció a los partidos y contribuyó a la pérdida de autonomía de cada uno de los parlamentarios. No resultaba aventurado prever que una nueva forma de hacer política empezaba a abrirse paso con la consolidación del sistema bipartidista. Las elecciones de noviembre de 1868 proporcionarían un rotundo triunfo a los liberales. Los tories habían vencido en la mayoría de los condados ingleses, pero los liberales les desbordaron en las grandes ciudades, al tiempo que recolectaban el sufragio en las circunscripciones galesas, escocesas e irlandesas. Se iniciaba un periodo de doce años en el que la rivalidad entre William E. Gladstone y Disraeli —un antagonismo que trascendía lo meramente político— pasó a ser característica de la vida política británica. Los gestores de esa dinámica fueron dos formaciones, liberales y conservadores, Whigs y Tories, que hacia 1850 habían consolidado el núcleo de alternancia en la dirección del Estado y del Imperio. El binomio Gladstone/Disraeli acabó personificando una alternancia que había tenido en el conde de Derby, el conde Russell y el vizconde Palmerston sus precedentes inmediatos y en la que, desde el respeto a las reglas marcadas, se procedía a la defensa de los intereses industriales y comerciales o a la de la aristocracia terrateniente. En cualquier caso, ambas formaciones compitieron, a su vez, por la atracción del nuevo voto popular.

Los equilibrios liberales en el interior, se correspondieron en el tiempo con la consolidación de un Imperio librecambista, en el que los intereses comerciales se presentaban del brazo de una voluntad civilizadora sostenida en una retórica de la superioridad moral. No menos cierto fue que en esta empresa expansiva estuvieron presentes las consideraciones estratégicas y la conveniencia de impedir, mediante el asentamiento colonial, la presencia de competidores o el desarrollo de conflictos que pudieran perjudicar los intereses británicos. En la India, que continuaba siendo la pieza fundamental del Imperio, se realizó la anexión de Oudh en 1856 y la gran insurrección de los cipayos en 1857 permitió la reorganización administrativa del territorio; la supresión, en 1858, de la East India Company, y la transferencia a la Corona de todos sus territorios y propiedades. El gobernador general se convirtió en virrey. En Australia, el descubrimiento de oro en Victoria, a comienzos de los cincuenta, aceleró el crecimiento de las migraciones procedentes de la metrópoli, a la vez que aumentaba la importancia económica de la isla-continente. La opinión favorable al autogobierno de las colonias de asentamiento blanco, desarrollada en la metrópoli desde mediados los cuarenta, se tradujo en la concesión de marcos de autonomía a Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania, Australia del Sur y Queensland entre 1852 y 1859. En cuanto a Canadá, la Columbia Británica se convirtió en colonia en 1858, y poco después se iniciaron los trabajos que desembocaron en la British North America Act de 1867. Gracias a este texto fundacional, las colonias de Canadá, Nueva Escocia y Nueva Brunswick se constituían en dominio de la Corona. Poco después se les unirían Manitoba y la Columbia Británica. El Imperio parecía sólido, pero el motín de la India, que tuvo ecos en otras colonias, dañó la seguridad de los colonizadores, que veían que sus afanes no eran correspondidos con el aprecio de los colonizados.